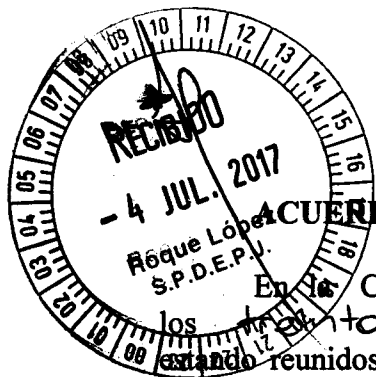


ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD:
"MARIA ISABEL RODRIGUEZ VDA. DE RIVEROS C/ ART. 1º DE LA LEY 3542/08, DE FECHA 10 DE JULIO DE 2008, ART. 18 inc. w) DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2015, ART. 1º DE LA LEY 3542/2008, ART. 1º DE LA LEY 4622/2012, ART. 18 inc. w) DE LA LEY 2345 DE FECHA 24 DE DICEIMBRE DE 2003, ART. 6º DEL DECRETO NRO. 1579/2004 Y LA RESOLUCION DGJP DEL MINISTERIO DE HACIENDA Nro. 1206 DE FECHA 23/04/2015".
AÑO: 2015 - Nº 631.



ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: Seiscientos setenta y tres

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los ~~treinta~~ **seis** días del mes de **junio** del año dos mil diecisiete, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctores **ANTONIO FRETES, GLADYS BAREIRO DE MÓDICA y MIRYAM PEÑA CANDIA**, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: **ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "MARIA ISABEL RODRIGUEZ VDA. DE RIVEROS C/ ART. 1º DE LA LEY 3542/08, DE FECHA 10 DE JULIO DE 2008, ART. 18 inc. w) DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2015, ART. 1º DE LA LEY 3542/2008, ART. 1º DE LA LEY 4622/2012, ART. 18 inc. w) DE LA LEY 2345 DE FECHA 24 DE DICEIMBRE DE 2003, ART. 6º DEL DECRETO NRO. 1579/2004 Y LA RESOLUCION DGJP DEL MINISTERIO DE HACIENDA Nro. 1206 DE FECHA 23/04/2015"**, a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por la Señora María Isabel Rodríguez Vda. de Riveros, por sus propios derechos y bajo patrocinio de Abogado.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente:

CUESTION:

¿Es procedente la acción de inconstitucionalidad deducida?-----


A la cuestión planteada el Doctor **FRETES** dijo: La Sra. **MARIA ISABEL RODRIGUEZ VDA DE RIVEROS**, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Art. 1º de la Ley Nº 3542/08 "Que modifica el Art. 8º de la Ley Nº 2345/03" de fecha 10 de julio de 2008; así también contra el Art. 18º Inc. w) de la Ley Nº 2345/03; Art. 1º de la Ley Nº 4622/2012; contra la Resolución del Ministerio de Hacienda Nº 1206 de fecha 23 de Abril de 2015 y contra el Art. 6º del Decreto Nº 1579/2004.

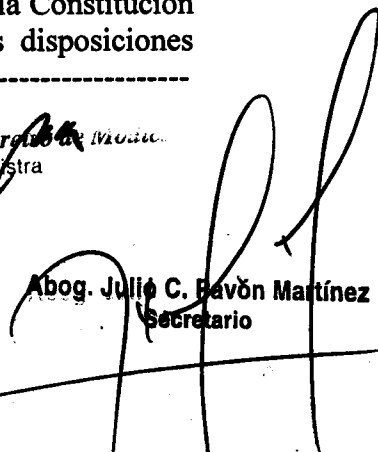
Se constata que la accionante acompaña copia de la Resolución DGJP Nº 1206 del 23 de Abril de 2015, acreditando por medio de este documento su calidad de heredera de efectivo retirado de las FF.AA.

Refiere la accionante que siendo heredera de efectivo de las FF.AA. se encuentra legitimada activamente para plantear la presente acción contra las citadas disposiciones, alega que actualmente se encuentra percibiendo una pensión cuyo monto es inferior al que le correspondería por derecho. Considera que el porcentaje establecido para determinar el monto que percibe en concepto de pensión jubilatoria en su carácter de heredera de efectivo de las Fuerzas Armadas de la Nación vulneran los Arts. 14º, 46º y 103º de la Constitución Nacional; por ello, solicita la declaración de inconstitucionalidad de las disposiciones impugnadas.


Miryam Peña Candia
MINISTRA C.S.J.


Dr. ANTONIO FRETES
Ministro


Dra. Gladys Bareiro de Modica
Ministra


Abog. Julio C. Favón Martínez
Secretario

En atención a la acción sobrevenida contra la Ley N° 3542 de fecha 26 de junio de 2008, que en su Art. 1° dispone: “Modificase el Art. 8° de la Ley N° 2345/2003 “*DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO*”, de la siguiente manera: Art. 8°.- *Conforme lo dispone el Artículo 103 de la Constitución Nacional, todos los beneficios que paga la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda se actualizarán anualmente, de oficio, por dicho Ministerio. La tasa de actualización será la variación del Índice de Precios del Consumidor calculados por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al periodo inmediatamente precedente. Quedan expresamente excluidos de lo dispuesto en este artículo, los beneficios correspondientes a los programas no contributivos*”.

A fin de esclarecer los conceptos corresponde primeramente traer a colación la disposición constitucional vinculada al sistema o régimen de Jubilaciones y pensiones del sector público, así tenemos principalmente el Art. 103° de la Constitución Nacional:-----

“Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios y de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado.-----

La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad”.

Se verifica claramente que la Constitución Nacional en su Art. 103° dispone que la Ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento con el funcionario público en actividad, mientras que la Ley N° 3542/08 supedita a la variación del índice de precios del consumidor calculados por el BCP como tasa de actualización.-----

Cabe manifestar que la “actualización” salarial a la que hace referencia el Art. 103° de la CN, se refiere al reajuste de los haberes en comparación, implica una igualdad de montos base para el cálculo de los devengados tanto por funcionarios activos como inactivos.-----

La ley puede naturalmente utilizar el IPC calculado por el Banco Central del Paraguay para la tasa de variación, siempre que esta se aplique a todo el universo de los afectados respetando las desigualdades positivas. Las distintas situaciones de los actores resultan de los distintos niveles jerárquicos y escalas salariales correspondientes, y estas diferencias originarias no se traducen en desigualdades injustas o discriminatorias como para igualarlas con un promedio (tasa común) en ocasión de las actualizaciones de los importes correspondientes a las Jubilaciones y Pensiones que de implementarse si constituiría un factor injusto y discriminatorio para los mismos, pues los haberes jubilatorios deben ser otorgados en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad.-----

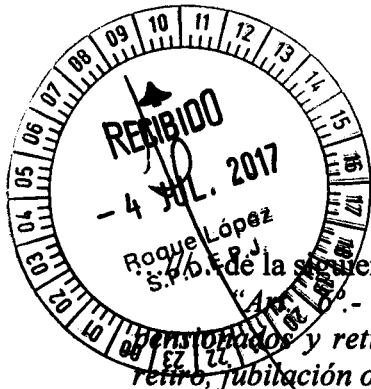
En nuestra Carta Magna se instituye como una garantía legal la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad. Por tanto, y en este caso en particular, en cuanto al mecanismo preciso a utilizar la Ley N° 3542/2008 no puede bajo ningún sentido contraponerse a la norma constitucional, pues carecería de absoluta validez conforme a lo dispuesto por el Art. 137° de la CN.-----

En esta instancia de análisis cabe traer a colación lo referido en cuando a la impugnación de la Ley N° 4622/12 “*QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 6 DE LA LEY N° 2345/03 “DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO”, MODIFICADA POR LEY N° 3217/07*”, el cual establece lo siguiente:-----

“Modificase el Artículo 6° de la Ley N° 2345/03 “*DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO*”, modificada por Ley N° 3217/07”, que queda redactado ...///...



ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD:
“MARIA ISABEL RODRIGUEZ VDA. DE RIVEROS C/ ART. 1º DE LA LEY 3542/08, DE FECHA 10 DE JULIO DE 2008, ART. 18 inc. w) DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2015, ART. 1º DE LA LEY 3542/2008, ART. 1º DE LA LEY 4622/2012, ART. 18 inc. w) DE LA LEY 2345 DE FECHA 24 DE DICEIMBRE DE 2003, ART. 6º DEL DECRETO NRO. 1579/2004 Y LA RESOLUCION DGJP DEL MINISTERIO DE HACIENDA Nro. 1206 DE FECHA 23/04/2015”.
AÑO: 2015 – Nº 631.-----



de la siguiente manera:-----
 Tendrán derecho a pensión, los sobrevivientes de los jubilados, pensionados y retirados fallecidos y del personal en actividad con derechos a haber de retiro, jubilación ordinaria o extraordinaria.-----

Los sobrevivientes con derecho a pensión son el cónyuge, los hijos y los padres siempre que vivan a expensas del causante y que no existan otros beneficiarios. Para tener derecho a pensión, los hijos deberán ser solteros, menores de edad, con excepción de los minusválidos.-----

En el caso de un activo fallecido, el monto inicial del beneficio se calculará como porcentaje de la jubilación o haber de retiro que le hubiere correspondido o como porcentaje sobre el monto de la jubilación, pensión o haber de retiro vigente en el caso de un jubilado, retirado o pensionado fallecido. Los porcentajes son los siguientes:-----

- a) 65% para el cónyuge, siempre que no existan hijos con derecho a pensión;
- b) si existen hijos con derecho a pensión, corresponderá el 45% para el o la cónyuge, y el 20% se distribuirá entre los hijos con derecho a pensión;
- c) en caso de orfandad, corresponderá la distribución equitativa del 50%; y,
- d) 25% para cada progenitor con derecho a pensión.

Al personal policial y militar fallecido en acto de servicio o a consecuencia de lesiones sufridas en dicho acto, se le conferirá el ascenso póstumo al grado inmediato superior, cualquiera fuere el tiempo de servicio y sus herederos tendrán derecho a una pensión equivalente al 80% (ochenta por ciento) de la remuneración correspondiente al grado póstumo. Los pensionados indicados en éste párrafo serán ingresados en las planillas de la Dirección de Pensiones no Contributivas.”-----

Con relación a los porcentajes establecidos en la disposición cuestionada, es dable referir que la fijación de los mismos se encuentra dentro de las atribuciones constitucionalmente conferidas al legislador en virtud al Principio de Reserva de Ley. Este principio es definido por Miguel Carbonell como “la remisión que hace normalmente la Constitución y de forma excepcional la ley, para que sea una ley y no otra norma jurídica la que regule determinada materia. En otras palabras, se está frente a una reserva de ley cuando, por voluntad del constituyente o por decisión del legislador, tiene que ser una ley en sentido formal la que regule un sector concreto del ordenamiento jurídico”, reserva que puede ser absoluta o relativa según los términos que utilice el texto constitucional al referirse a ella. En nuestro caso, vemos que la Constitución en el artículo 103º no establece límite alguno en la materia, ni especifica cuáles serán los aspectos jubilatorios reglados por ley, lo que significa que la reserva de ley es absoluta.-----

En tal sentido, los porcentajes a ser percibidos por los herederos de los funcionarios jubilados se encuentran establecidos en uso de las potestades con las que cuenta el Poder Legislativo por delegación constitucional, lo que equivale a decir que la disposición impugnada resulta como consecuencia directa del cumplimiento de lo preceptuado por el Art. 103º de la Carta Magna, por lo que mal podría declararse su inconstitucionalidad.-----

Miryam Peña Candia
 MINISTRA C.S.J.

Dr. ANTONIO FRETES
 Ministro

Dra. Guayla Barreto de Mónica
 Ministra

Abog. Julio G. Pavón Martínez
 Secretario

Por otra parte, al no darse curso a la impugnación de la disposición de la Ley N° 4622/2012, corresponde que la Resolución DGJP-B N° 1206 del 12 de Abril de 2015 corra con igual suerte, es decir, la constitucionalidad o no del acto normativo citado, depende directamente de lo resuelto en relación a la disposición vinculada a su impugnación.-----

Ahora bien, respecto al Art. 18° Inc. w) de la Ley N° 2345/2003, se advierte en este punto que la accionante pretende fundar sus agravios refiriendo que la disposición cuestionada deroga expresamente el Art. 6° de la propia Ley N° 2345/2003; muy por el contrario a lo manifestado por la recurrente, la disposición cuestionada deroga los artículos 187°, 192° numeral 2), 211°, 217°, 218°, 219°, 224°, y 226° de la Ley N° 1.115/97, se evidencia de esta manera que la recurrente no expone ni individualiza cual es la normativa que pretende reivindicar de entre las disposiciones efectivamente derogadas; todas estas circunstancias impiden su consideración por esta Magistratura, que de ninguna manera puede suplir por inferencia la omisión apuntada.-----

En cuanto a la objeción planteada contra el Art. 6° del Decreto N° 1579/04, resulta que esta disposición cuestionada era reglamentaria del Art. 8° de la Ley N° 2345/2003 en cuanto al mecanismo de actualización de haberes jubilatorios. Actualmente teniendo en cuenta la nueva redacción dispuesta en la Ley N° 3542/08, el Ministerio de Hacienda aplica directamente la variación del Índice de Precios del Consumidor como tasa de actualización anual de los haberes jubilatorios, dejando de lado así el Decreto Reglamentario N° 1579/04.-----

Conforme a lo precedentemente expuesto, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la Acción de Inconstitucionalidad y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del Art. 1° de la Ley N° 3542/08 "*Que modifica el Art. 8° de la Ley N° 2345/03*" en relación a la Sra. **MARIA ISABEL RODRIGUEZ VDA. DE RIVEROS**, conforme al Art. 555° del CPC. Es mi Voto.-----

A su turno la Doctora **BAREIRO DE MÓDICA** dijo: La Señora "*María Isabel Rodríguez Vda. de Riveros*", por sus propios derechos y bajo patrocinio de Abogado, en su calidad de heredera (pensionada) de efectivo retirado de las Fuerzas Armadas de la Nación, promueve acción de inconstitucionalidad contra el Art. 1° de la Ley N° 3542/08 "*Que modifica el Art. 8 de la Ley N° 2345/03*"; Art. 18 Inc. w) de la Ley N° 2345/03; la Resolución N° 1206 del 23 de abril de 2015 del Ministerio de Hacienda; el Art. 1° Inc. a) de la Ley N° 4622/12 y el Art. 6 del Decreto N° 1579/04.-----

Alega la accionante que las normas impugnadas transgreden aviesamente los Arts. 14, 46, 102, 103 y 137 de la Constitución Nacional.-----

La accionante acompaña a la presentación de esta acción de inconstitucionalidad los documentos que acreditan su calidad de heredera con la Resolución DGJP-B N° 1206 del 23 de abril de 2015, "*...Art. 1° Acordar pensión mensual de GUARANIES CUATRO MILLONES TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA (Gs. 4.035.470) a la Sra. María Isabel Rodríguez Vda. de Riveros, viuda del extinto Teniente Coronel Carlos Ramón Riveros Cano, de conformidad con el Art. 6 de la Ley N° 2345/03*".-----

1) La presente acción de inconstitucionalidad es promovida por la Señora María Isabel Rodríguez Vda. de Riveros quien, como hemos comprobado con los documentos adjuntados, quedó en situación de viudez del Teniente Coronel de las Fuerzas Armadas de la Nación Carlos Ramón Riveros Cano en fecha 14 de junio de 2014. Luego, la hoy accionante, inició trámites para el cobro de la pensión en su calidad de cónyuge supérstite y obtuvo resolución de la autoridad competente según Resolución DGJP-B N° 1206 de fecha 23 de abril de 2015. La cual le aplicó a su caso particular el Art. 6 de la Ley N° 2345/03, a la fecha plenamente vigente.-----

Basa su agravio en que se viola el principio de la irretroactividad de la Ley y el de los derechos adquiridos, los cuales se perjudican con la redacción en cuanto a los porcentajes de cobro de pensión que establece la nueva redacción de la ley impugnada y afirma que la ley anterior, 1115/97 se encuentra adecuada a la...///...

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD:
“MARIA ISABEL RODRIGUEZ VDA. DE RIVEROS C/ ART. 1º DE LA LEY 3542/08, DE FECHA 10 DE JULIO DE 2008, ART. 18 inc. w) DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2015, ART. 1º DE LA LEY 3542/2008, ART. 1º DE LA LEY 4622/2012, ART. 18 inc. w) DE LA LEY 2345 DE FECHA 24 DE DICEIMBRE DE 2003, ART. 6º DEL DECRETO NRO. 1579/2004 Y LA RESOLUCION DGJP DEL MINISTERIO DE HACIENDA Nro. 1206 DE FECHA 23/04/2015”.
AÑO: 2015 – N° 631.-----



... la Constitución Nacional.-----
 En el caso particular de la Señora María Isabel Rodríguez Vda. de Riveros debemos establecer lo siguiente: ella como accionante no era titular original del derecho establecido en la Ley N° 1115/97, en consecuencia, en su calidad de heredera, sus derechos no fueron adquiridos sino son los denominados en derecho, como de "mera expectativa". Como hemos establecido más arriba, la fecha de deceso del titular es el 14 de junio de 2014, tiempo en el cual la nueva ley ya se encontraba en plena vigencia, por lo que el derecho de la accionante nace bajo el imperio de la Ley N° 2345/03. La autoridad administrativa no hizo nada más que aplicar la legislación vigente. En consecuencia no hay derechos adquiridos violados ni violación a la irretroactividad de la Ley. Por tanto la impugnación en relación al Art. 6 de la Ley N° 2345/03 (Modificado por el Art. 1º de la Ley N° 4622/12) y la Resolución DGJP-B N° 1206/15 del Ministerio de Hacienda devienen improcedentes.-----

2) Con relación al Art. 1º de la Ley N° 3542/08, el Art.103 de la C.N. dispone que "La Ley" garantizará la actualización de los haberes Jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad. Por tanto ni la ley, en este caso la Ley N° 3542/08, ni la Resolución reglamentaria que dicte el Poder Ejecutivo relacionado con "...el mecanismo preciso a utilizar", pueden oponerse a lo establecido en la norma constitucional transcripta, porque carecerán de validez (Art.137 CN). De ahí que al supeditar el Art. 1º de la Ley N° 3542/08, la actualización de todos los beneficios pagados por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones al "...promedio de los incrementos de salarios..." crea una media de regulación, entre básicos y altos salarios de la cohorte de funcionarios activos, no prevista en la Constitución, que puede ciertamente beneficiar a los primeros pero decididamente perjudicar a los segundos.-----

La Constitución Nacional ordena que la ley garantice ..."la actualización" de los haberes jubilatorios "... en igualdad de tratamiento dispensando al funcionario público en actividad" (Art. 103 CN); la Ley N° 3542/08 supedita la actualización "...al promedio de los incrementos de salarios del sector público" y al IPC calculado por el BCP, como tasa de actualización. Sin embargo, el Poder Ejecutivo al reglamentar "...el mecanismo preciso a utilizar": Decreto N° 1579/04, introduce unas variables y unos universos extraños a los preestablecidos para obtener el "Factor ajuste", que podría eventualmente servir de factor de ajuste pero no para actualizar, los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad.-----

2.1.- El Art. 46 de la CN dispone: "*De la Igualdad de las personas: Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios sino igualitarios*".-----

2.2.- La ley puede, naturalmente, utilizar el IPC calculado por el B.C.P para la tasa de variación, siempre que ésta se aplique a todo el universo de los afectados respetando


Miryam Peña Candía
 MINISTRA C.S.J.


Dr. ANTONIO FRETES
 Ministro


 Dra. Gladys Arellano de Mónica
 Ministra


 Abog. Julio C. Pavón Martínez
 Secretario

las desigualdades positivas. Las distintas situaciones de los actores resultan de los distintos niveles jerárquicos y escalas salariales correspondientes y éstas diferencias originarias no traducen "...desigualdades injustas" o "...discriminatorias" (Art. 46 CN) como para igualarlas con un promedio (tasa común) en ocasión de las actualizaciones de los importes correspondientes a las Jubilaciones y Pensiones que de implementarse sí constituiría un factor injusto y discriminatorio para los mismos.-----

La igualdad de tratamiento contemplada en la norma constitucional implica que los aumentos resueltos por el Poder Ejecutivo a favor de los activos favorece de igual modo a los jubilados, a los cuales sus haberes debe actualizarse en igual porcentaje y tiempo que lo hace el Ministerio de Hacienda respecto a los activos. Debemos recordar que al funcionario activo aportante, cuando se produce un aumento salarial, su primer aumento va de forma íntegra a la Caja de Jubilaciones para compensar el nuevo aumento obtenido, el cual beneficia de modo directo a los jubilados.-----

Tenemos el deber constitucional de identificar el derecho comprometido en la causa, en la medida en que existe la inexorable necesidad de satisfacer el interés público de proteger y defender los derechos fundamentales de la persona. Nuestra obligación es hacer justicia y velar por la supremacía de la Constitución, en el marco del respeto de las garantías constitucionales en él amparadas. En esta línea de argumento, el Poder Judicial, y en especial la Corte Suprema de Justicia, está obligado a remover factores que propicien discriminaciones prohibidas por nuestra Constitución; por ello, cualquier interpretación que favorezca la discriminación que significa que una persona con derechos y calidad adquiridos, resulte menoscaba y/o discriminada no puede sino ser tachado de inconstitucional.-----

3) En relación con la impugnación referida al Art. 18 inc. w) de la Ley N° 2345/2003, creo oportuno considerar que el mismo contraviene principios establecidos en los Arts. 14, 46 y 103 de la Constitución Nacional, creando una mayor desigualdad en cotejo con lo ya expuesto en cuanto al agravio constitucional que genera el mecanismo de actualización establecido en el Art. 8 de la Ley 2345/2003.-----

4) Finalmente, sobre la impugnación del Art. 6 del Decreto N° 1579/04, tenemos que el mismo era reglamentario del Art. 8 de la Ley N° 2345/03 en cuanto al mecanismo de actualización de los haberes jubilatorios. Actualmente con la nueva redacción instituida en la Ley N° 3542/08 el Ministerio de Hacienda aplica directamente la variación del Índice de Precios del Consumidor como tasa de actualización anual de los haberes jubilatorios, dejando de lado el mecanismo previsto en el Decreto N° 1579/04. Ante tales extremos, el caso sometido a consideración de esta Sala no surge como controversial sino meramente abstracto y la eventual declaración de inconstitucionalidad de la norma no tendría más efecto que el solo beneficio de la norma.-----

En consecuencia y en atención a las manifestaciones vertidas, considero que debe hacerse lugar parcialmente a la Acción de Inconstitucionalidad promovida con relación al Art. 1° de la Ley N° 3542/08 (Que modifica el Art. 8 de la Ley N° 2345/03) y Art. 18 Inc. w) de la Ley N° 2345/03, por los fundamentos expuestos. Es mi voto.-----

A su turno la Doctora **PEÑA CANDIA** manifestó que se adhiere al voto del Ministro preopinante, Doctor **FRETES**, por los mismos fundamentos.-----

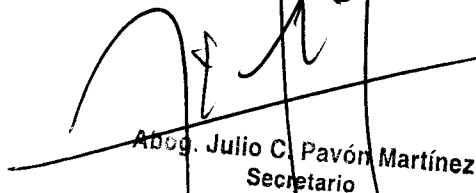
Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante mí, de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:


Miriam Peña Candia
Ministra de Justicia


Dr. ANTONIO FRETES
Ministro


Dra. Gladys Bareiro de Mónica
Ministra

Ante mí:

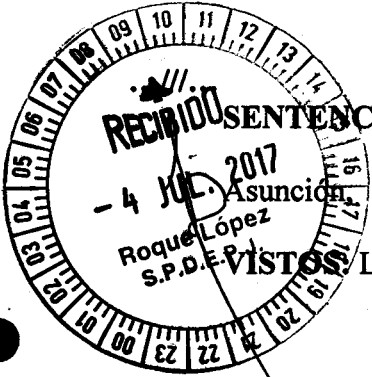

Abog. Julio C. Pavón Martínez
Secretario

...///...



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD:
 “MARIA ISABEL RODRIGUEZ VDA. DE RIVEROS C/ ART. 1° DE LA LEY 3542/08, DE FECHA 10 DE JULIO DE 2008, ART. 18 inc. w) DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2015, ART. 1° DE LA LEY 3542/2008, ART. 1° DE LA LEY 4622/2012, ART. 18 inc. w) DE LA LEY 2345 DE FECHA 24 DE DICEIMBRE DE 2003, ART. 6° DEL DECRETO NRO. 1579/2004 Y LA RESOLUCION DGJP DEL MINISTERIO DE HACIENDA Nro. 1206 DE FECHA 23/04/2015”.
 AÑO: 2015 – N° 631.-----



SENTENCIA NÚMERO: 673

30 de junio de 2017.-

VISTOS Los méritos del Acuerdo que anteceden, la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Sala Constitucional
RESUELVE:

HACER LUGAR parcialmente a la acción de inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Artículo 1° de la Ley N° 3542/08 “Que modifica el Art. 8° de la Ley N° 2345/03”, en relación a la accionante.-----

ANOTAR, registrar y notificar.-----

Ante mí:

Miryam Peña Candia
Miryam Peña Candia
 MINISTRA C.S.J.

Dr. Antonio Fretes
Dr. ANTONIO FRETES
 Ministro

Dra. Gladys Bareiro de Mónica
Dra. Gladys Bareiro de Mónica
 Ministra

Abog. Julio C. Pavón Martínez
Abog. Julio C. Pavón Martínez
 Secretario

